

Distinta, sin embargo, es la valoración que corresponde hacer del otro aspecto de la pretensión de inconstitucionalidad que se considera, atinente al parágrafo 7 del artículo 4. Esta norma se refiere a la integración de la Junta Directiva con miembros representa-

tivos de diferentes gremios, de la salud, de los jubilados y pensionados, de los servidores públicos y de la Asociación Nacional de Asegurados, siendo que esta última mención en modo alguno revela, como en el caso del literal f, que se produzca con merma de los derechos constitucionales de los demandantes. Aquí, nuevamente, la omisión en que incurre el libelo de expresar, de modo distinto y adecuado, el concepto de las violaciones alegadas, le impide al tribunal constitucional percatarse del fundamento de este extremo de la pretensión.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA** que la frase: "Asociación Nacional de Asegurados y", contenida en el literal f del artículo 4 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, **ES INCONSTITUCIONAL** por infringir el artículo 20 de nuestra Constitución Política, no así la misma frase cuando aparece contenida en el parágrafo 7o. del artículo 4 de la Ley en cita, la que, por lo tanto, no es inconstitucional.

NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE.

(Fdo.) FABIAN A. ECHEVERS.

(Fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES.

(Fdo.) CECILIO A. CASTILLERO.

(Fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA.

(Fdo.) AURA E. GUERRA  
DE VILLALAZ.

(Fdo.) ARTURO HOYOS.

(Fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(Fdo.) RAUL TRUJILLO MIRANDA.

(Fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI  
DE AGUILERA.

(Fdo.) YANIXSA YUEN DE DIAZ.  
Secretaria General Encargada.-

[illegible]

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. RICARDO LACHMAN V., EN CONTRA DEL ARTICULO 194 DE LA LEY 8 DE 30 DE MARZO DE 1982. (MAGISTRADO PONENTE: **ARTURO HOYOS**).

LA CORTE SUPREMA -PLENO- ESTIMA QUE NO ES  
INCONSTITUCIONAL EL ART. 194 DE LA LEY 8 DE 1982.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).-

**V I S T O S:**

El Licdo. RICARDO LACHMAN VARELA ha presentado demanda de inconstitucionalidad relacionada con el artículo 194 de la Ley 8 de 1982 en virtud de la cual se aprobó el Código de Procedimiento Marítimo.

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que declare que es inconstitucional el artículo 194 de la Ley 8 de 1982.

#### I.- El vicio de inconstitucionalidad que se atribuye a la norma legal impugnada.

El demandante considera que la norma legal por él impugnada adolece de un vicio de contenido, pues la regulación que ella contiene es incompatible con lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución. El texto del artículo 73 de la Constitución es el siguiente:

"ARTICULO 73: Todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por la Ley."

El demandante estima que el artículo 194 de la Ley 8 de 1982 contraría lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución porque al atribuírsele competencia privativa a los tribunales marítimos para la ejecución y levantamiento de secuestros librados contra naves, su combustible y la carga a bordo, decretados por tribunales que no son competentes para conocer de causas derivadas del comercio y tráfico marítimo desconoce que las controversias que se originan de las relaciones entre el capital y el trabajo quedan sometidas a la jurisdicción especial del trabajo.

#### II.- La postura del Procurador de la Administración.

El representante del Ministerio Público al emitir concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licdo. Lachman estimó que la mencionada norma legal no es inconstitucional.

El citado funcionario señaló en su vista lo siguiente:

"En primer lugar, la norma legal acusada se limita a otorgarle competencia a los tribunales marítimos únicamente en lo que dice relación a "la ejecución y levantamiento de un secuestro dirigido contra naves" y otros bienes a bordo que la norma menciona, esto es, para cumplir con la orden de secuestro o con la orden de levantamiento del secuestro, lo que no implica competencia para resolver una controversia en el campo laboral.

Hay que recordar que el secuestro desde el punto de vista jurídico constituye una medida cautelar, mediante la cual se deposita en poder de un tercero un bien con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación, cuya realización se pretende en un proceso. Su ejecución y levantamiento no implica la decisión de una controversia...

Por otra parte, la norma no se refiere a los secuestros ordenados por los tribunales de la jurisdicción laboral, puesto que está concebida en términos generales y que, por ello, se refiere en conjunto a los secuestros ordenados por tribunales civiles, laborales o de cualquier otra naturaleza que afecten las naves o a los otros bienes en ella señalados. Esta circunstancia contribuye a explicar lo que antes hemos expuesto, esto es, que la norma tiende a instituir un mecanismo único para la ejecución y levantamiento de secuestros sobre tales bienes, tomando en consideración las características especiales de las naves y del comercio marítimo. Se asevera que, v.g., el secuestro y retención de una nave en un puerto conlleva graves perjuicios económicos para el armador o los propietarios de las mercaderías o de la nave, debido a los altos costos que originan los cargos por los servicios portuarios, los gastos de mantenimiento de la nave y por la pérdida de los ingresos derivados de los fletes a cobrar, lo que no ocurre con el secuestro de otro tipo de bienes situados en el territorio del país.

Es por esto que el Código Marítimo ha instituido mecanismos especiales para llevar a cabo los secuestros y embargos de naves, dotando a los tribunales marítimos de facultades que le permitan actuar con prontitud y a cualquier hora del día en cualquier día del año.'

#### III.- Decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la pretensión planteada en la demanda.

Es importante destacar, ante todo, el carácter de autonomía de las medidas cautelares con respecto a la pretensión principal que se formule en un proceso. Así, hay quienes hablan de un verdadero proceso cautelar, como el tratadista español Víctor Fairén Guillén (Doctrina General del Derecho Procesal, Editorial Bosch, Barcelona, 1990). También tratadistas nacionales se han referido a esta materia como, por ejemplo, el Licdo. Jorge Fábrega P., quien en su obra titulada Medidas Cautelares (Panamá, 1984, pág.270) señala lo siguiente:

"A pesar de su carácter instrumental, las medidas cautelares en cuanto a su objetivo son autónomas. Su objetivo es asegurar la ejecución, lo cual entraña un objetivo distinto a la cognición y a la ejecución. Es el "tertium genus", de que habla Rocco.

Algunos autores se refieren al derecho substancial de cautela. Allorio ha escrito un ensayo intitulado "Per una nozione del processo cautelare", en el cual explica que no puede apoyarse la acción cautelar en el derecho principal afirmado en el proceso por los siguientes motivos:

Es ésta una materia en la que la Corte considera conveniente enfatizar que las normas constitucionales deben ser interpretadas a la luz del principio de prudencia, que debe hacer consciente a los jueces constitucionales de las consecuencias de sus decisiones. Una interpretación del artículo 73 de la Constitución Nacional en el sentido propuesto por el demandante no se adecúa a las necesidades de la República de Panamá como un país que debe darle un tratamiento jurídico especializado a los asuntos relacionados con las naves y su carga que transitan por nuestras aguas territoriales. La Corte considera que el legislador ha obrado con justificación al establecer en el artículo 184 de la Ley 8 de 1982 que los secuestros sobre barcos, su combustible y su carga, serán practicados y administrados por un tribunal especializado en asuntos marítimos. En nada altera esta norma las potestades de la jurisdicción especial de trabajo para resolver el fondo de la controversia laboral. Dejar en manos de los tribunales laborales una materia tan especializada como los secuestros sobre las naves y su carga puede traer consecuencias contrarias a las perseguidas en nuestro sistema